

el partido de la capital, contra el acuerdo de la Legislatura del Estado, en que, con objeto de compelerlo para que presentara su credencial, le manifestó las penas á que se hacen acreedores los funcionarios de eleccion popular cuando se niegan al cumplimiento de su encargo. Segundo: con fundamento de lo que dispone el artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero, se impone á D. Hilario Prieto una multa de cien pesos. Tercero: táchense las palabras ofensivas que ha asentado en su ocurno el Sr. Prieto, subrayándose por ahora hasta que revise este fallo la Suprema Corte de Justicia, y adviértase que en lo sucesivo, al hablar de las autoridades, lo haga con el respeto debido; con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando: que la declaracion que hizo la Legislatura de haber incurrido el C. Hilario Prieto en lo dispuesto por el artículo 11 de la la Constitucion particular del Estado no es una pena propiamente tal, porque el carácter de ésta es ser irrevocable, y el mismo C. Prieto puede hacer cesar los efectos de la declaracion de la Legislatura con solo presentarse á cumplir con su encargo de diputado, para lo cual está sin duda alguna expedito. Se declara, 1º que es de confirmarse y se confirma, la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de San Luis Potosí, pero en los términos indicados. 2º se revoca la segunda parte de la referida sentencia que condenó al C. Hilario Prieto al mínimum de la multa impuesta por el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 69. 3º se reforma la tercera parte de la misma sentencia, previniendo al C. Prieto, que al dirigirse á las autoridades, lo haga con el respeto debido y en los términos convenientes.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y ministros que for-

maron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Simon Arteaga.*—*J. M. Tafraqua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*J. Garcia Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.—Es copia.—México, Febrero 4 de 1871.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## COMPETENCIA

*Seguida entre el Juez de 1ª instancia de Tlaxcala y el de igual clase de Tecamahalcas de Guerrero, para conocer del juicio ejecutivo promovido por D. Agustín Leroux á D. Pascual Arenas.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: Que de las constancias que se tienen á la vista, resulta que D. Agustín Leroux demandó ejecutivamente, por mediode su apoderado el ciudadano Ramon Alavez, al de igual clase Pascual Arenas el importe de unos pagarés de desamortizacion firmados por éste, y cuya demanda se intentó ante el Juzgado de Letras de Tlaxcala.

Dichos pagarés, tenian por objeto la desamortizacion de los capitales piadosos que reconocian las Haciendas de S. Sebastian, Zumpango y la del Espíritu Santo, situadas en la municipalidad del pueblo de San Luis Teolocholco. Esto pasaba en 10 de Junio de 1867. Mas como quiera que se ignoraba el paradero del demandado, fué necesario emplazarlo por los periódicos, fijándole un tiempo para que se presentara á reconocer sus firmas, bajo el apercibimiento legal. En cinco periódicos de Tlaxcala y Puebla se hizo el emplazamiento y se fijó el término de quince dias.

Pasados éstos, sin que el emplazado compareciera, se presentó de nuevo el actor en

2 de Julio del año citado, solicitando, que en vista del lapso del término del emplazamiento, se dieran por reconocidas las firmas, y se librara el auto de exequiendo en rebeldía, con notificación de los estrados del Juzgado, y señalando desde luego para la traba de la ejecución las haciendas hipotecadas al capital redimido, como hipotecado éste al pago de los pagarés, importantes ya la cantidad de ochocientos dos pesos treinta y cinco centavos, por incluirse los réditos causados, y además por las costas causadas y que se causaren.

El Juzgado, no creyendo suficientes los estrados del Tribunal, para sentenciar el juicio ejecutivo, tuvo por mas acertado y de conformidad con lo prevenido en la ley 12, tít. 2º part. 3ª se nombrara un defensor al demandado, dando por reconocidas las firmas de los pagarés; y librando en fin el auto de exequiendo que se le tenía pedido, con calidad de que todas las diligencias subsiguientes se entendieran con el defensor nombrado, que representaba al ausente Arenas. Este auto se espidió en 3 de Julio citado y quedó nombrado defensor el ciudadano Lic. Manuel Seoane, quedando en tal estado el expediente.

Mas en 28 de Diciembre del año siguiente, es decir en el de 1868, se presentó la parte actora, promoviendo de nuevo el juicio y solicitando que se llevara á ejecución lo dispuesto en el auto de 3 de Julio del año anterior, ó lo que es lo mismo, en el de 67. El Juzgado entonces proveyó un auto, fecha 31 del mismo Diciembre, por el que se mandó se hiciera saber al Lic. Seoane su nombramiento de defensor, á fin de que si aceptaba, se le tuviera como parte en el juicio. Este letrado aceptó su comision, y con citacion de él se decretó en 25 de Enero de 1869, el embargo de los bienes, los que consistian, por señalamiento que de ellas hizo el defensor en las haciendas de San Sebastian y Espíritu Santo, de que se hizo antes mencion, quedando como depositario de las mismas el propio defensor, y oponiendo éste la excepcion de paga.

El negocio se recibió luego á prueba por el término de la ley, y en óbvio de dificultades, se comunicó el trámite al encargado de las citadas fincas.

Tal era el estado que guardaba este negocio, cuando en 10 de Marzo del mencionado año de 69, compareció ante el Juzgado de 1ª instancia de Tecamachalco, el ciudadano Amado Castillo, manifestando que desde el mes de Febrero de 1861, D. Pascual Arenas, en representacion del esponente y su esposa Dª Guadalupe Rios, se presentó á la Prefectura de Tlaxcala, con objeto de redimir los capitales piadosos, que reconocian al clero, las haciendas de San Sebastian, Zumpango y Espíritu Santo, por valor de tres mil quinientos sesenta y seis pesos, efectuándose la redencion con arreglo á la ley, y en virtud de ella estendidos ochenta pagarés, por valor cada uno de diez y siete pesos ochenta y tres centavos, para irlos cubriendo en otros tantos meses. Que desde hacia algun tiempo, continúa alegando Castillo, tenia entregadas dichas fincas al Lic. Manuel Ignacio Loiza, vecino de Puebla, para que con sus arrendamientos, se pagase de una deuda que gravitaba sobre ellas. Que nunca se le habia presentado alguna persona, á cobiarle el importe de los referidos pagarés, y que por esa circunstancia estaba en la persuasion de que ya habrian sido satisfechos: que por tal motivo le habia causado gran sorpresa el contenido del oficio que el Juzgado de Letras de Tlaxcala pasó al arrendatario de las haciendas en cuestion, relativo al embargo que se habia decretado de ellas, á consecuencia del juicio ejecutivo que D. Agustín Leroux promovió para que se le satisficiera el importe de los pagarés firmados por Arenas. De esos antecedentes, y fundado en los razones legales, de que él y su esposa están domiciliados en territorio muy distinto del de el Juez de Tlaxcala; de que ellos son los verdaderos dueños de las haciendas embargadas y en ninguna manera Arenas; que aun tomando en consideracion la naturaleza de la accion, que en

el presente caso se ejercita por Leroux, á saber, la hipotecaria, esta es mixta; y por lo mismo no puede dirigirse contra la cosa, dice Castillo, antes de haberse exigido á la persona el cumplimiento de la obligacion: de todas esas razones de hecho y de derecho, concluye pidiendo al Juez de Tecamachalco, se declare único competente, para conocer en el juicio ejecutivo promovido por Leroux, y que á este efecto pase su oficio inhibitorio al de Tlaxcala, para que se abstenga de seguir conociendo en él, y de no hacerlo, le inicie y promueva la correspondiente competencia.

Entablada en toda forma, aceptada y sostenida por ambos jueces, creyéndose cada uno por su parte con la jurisdiccion bastante, ha sido elevada á esta Suprema Corte, para que se digne dirimirla.

El suscrito que ha examinado detenidamente los fundamentos en que cada Juez se apoya para sostener su respectiva pretension, desde luego se inclina á favor del Juez que ha conocido ya del juicio, es decir, por el Juez de Tlaxcala. En sentido del fiscal, la razon es demasiado obvia. Para ello basta fijarse por un momento en la naturaleza misma del negocio, siguiéndolo en su marcha progresiva.

Comenzó, sin duda alguna, por un contrato de nacionalizacion, ó por mejor decir, de redencion. Que en esta operacion fungia Arenas de representante ó apoderado de D<sup>a</sup> Guadalupe Rios, tambien está fuera de duda, en vista de los certificados que obran en este expediente, fojas 11 y 12 del cuaderno formado por el Juez de Tecamachalco. Mas en lo que tampoco puede ponerse duda alguna, es en que al expedir Arenas los vales ó pagarés al portador, en estos documentos habló en nombre propio, hipotecó con tal carácter, y en manera alguna hizo mencion de un estraño, á cuyo nombre ó representacion gestionase.

El tenor en que estaban escritos esos pagarés puede verse en el informe que rinde el Juez de Tlaxcala. De donde se deduce con toda claridad, que en el presente nego-

cio, como en todos los de su género, intervienen dos contratos absolutamente distintos el uno del otro. El primero fué el de una redencion, que se verificó entre Arenas por una parte, como representante de los dueños de las haciendas de San Sebastian y Espíritu Santo, y por la otra con la hacienda pública, como dueño de los bienes del clero en virtud de la ley. El otro contrato es muy distinto al primero, y tanto que ya fué un contrato puramente literal, cuya accionnacia del vale ó pagaré expedido, que se celebró entre Arenas y el portador que fuera de esos mismos vales al tiempo de su vencimiento. Pues bien, el contrato literal, como que nace de un hecho lícito, produce como todos los de su especie, una accion personal, para obligar al que escribió á pagar la cantidad que confiesa. En los pagarés suscritos por Arenas, á nombre propio y sin hacer mencion de ningun estraño, contrajo una obligacion absolutamente personal, y en manera alguna, el portador que de buena fé recibió los documentos suscritos por Arenas, estaba en la necesidad de averiguar su origen. Esto era absolutamente ageno de la naturaleza misma del contrato. Ahora, si Arenas era el único responsable á la obligacion que contrajo, el acreedor estuvo en pleno derecho para demandarlo ante el Juez de Tlaxcala, punto donde se celebró el contrato, y en el cual estaba domiciliado el deudor al tiempo de contraer.

Pero entonces, como debe entenderse la accion que Castillo pretende deducir en este negocio, bien manifiesta, ella demuestra con bastante claridad ser una tercera de dominio, tercera excluyente, pero mala ó irregularmente entablada. Si Castillo y su esposa pretenden que las fincas embargadas son de su exclusiva propiedad; si quieren hacer valer éstos, que Arenas en manera alguna pudo dejarlas responsables á pago alguno y que en realidad nada deben por razon de los citados pagarés, las fincas de San Sebastian y Espíritu Santo, háganlo en buena hora pero en la forma y manera que las leyes establecen. Pero aún intro-

ducida la tercería de un modo regular, nunca se ha visto que el tercer opositor declinase la jurisdicción del juez que conoce en el juicio principal. Así, pues, el Fiscal entiendo que, sin ninguna duda, el Juez de Tlaxcala tiene una jurisdicción indisputable para seguir adelante en el juicio á que este pedimento se refiere, y por lo mismo concluye pidiendo al Tribunal así se sirva declarar, á cuyo fin presenta las siguientes proposiciones:

1.<sup>ª</sup> Se declara que el C. Juez de letras de Tlaxcala, tiene la jurisdicción competente y necesaria, para seguir conociendo en el juicio ejecutivo que ante él ha promovido el Sr. D. Agustín Leroux, contra el C. Pascual Arenas.

2.<sup>ª</sup> Devuélvanse sus actuaciones, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, y copia igual al de Tecamachalco para su conocimiento, y archívese el toca.

México, Enero 5 de 1870.—(Firmado) *Altamirano.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—Vista la competencia iniciada entre el Juez de primera instancia de Tecamachalco de Guerrero, en el Estado de Puebla, y el de igual clase de Tlaxcala, para conocer en el juicio que D. Agustín Leroux promovió al C. Pascual Arenas, relativo á unos pagarés de desamortización firmados por el segundo: los escritos de las partes, que con el carácter de litigantes intervinieron en este juicio, sosteniendo la competencia de cada uno de los mencionados jueces: las comunicaciones cambiadas entre ambos: los informes remitidos á esta primera Sala de que habla la ley, con todo lo demás que de autos consta y ver convino. Considerando: que en el presente caso es de atenderse al lugar donde

está la cosa y á la naturaleza misma de la obligación que ha dado origen á la acción intentada por el actor: Considerando, que en tal sentido, las haciendas de San Sebastian, Zumpango y Espíritu Santo, afectas al pago de los referidos pagarés, están situadas dentro de la jurisdicción del Juez de Tlaxcala, y la naturaleza de la obligación exige que el demandado conteste ante esa misma autoridad, todo de acuerdo con lo prevenido en la ley 23, tít. 2, part. 3.<sup>ª</sup>, es de declararse y se declara: que el Juez de 1.<sup>ª</sup> instancia de Tlaxcala es el competente para conocer en el juicio promovido por Leroux, y al que se refiere esta competencia.

Remítanse las actuaciones, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: remítase copia igual al de Tecamachalco para su conocimiento. Hágase saber y archívese el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la 1.<sup>ª</sup> Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*Pedro Ogaszon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Son copias. México, Enero veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido por D.<sup>a</sup> Luisa Gutierrez contra el Gefe político de Acolpan por violacion de garantías.*

OCURSO DE DOÑA LUISA GUTIERREZ.

Ciudadano Juez de Distrito. Luisa Gutierrez, ante V. con el respeto debido y salvas las protestas competentes, digo: que el día 3 del presente como á las cinco de la tarde, se introdujo á mi casa una fuerza de caballería, y de órden del ciudadano